SENTENCIA NÚMERO: TRESCIENTOS NUEVE

En la Ciudad de Córdoba, a los tres días del mes de agosto de dos mil dieciocho, siendo las once horas, se constituyó en audiencia pública la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, presidida por el señor Vocal doctor Sebastián Cruz López Peña, con asistencia de las señoras Vocales doctoras Aída Tarditti y María Marta Cáceres de Bollati, a los fines de dictar sentencia en los autos **“M., J. A. p.s.a. homicidio calificado tentativa, etc. -Recurso de Casación-” (SAC XXXXX)**, con motivo del recurso de casación interpuesto por el Dr. A. P. V., defensor del imputado J. A. M., en contra de la Sentencia número veinte, dictada el once de mayo de dos mil dieciséis, por la Cámara en lo Criminal y Correccional, Civil y Comercial, del Trabajo y de Familia de la ciudad de Deán Funes.

Abierto el acto por el señor Presidente se informa que las cuestiones a resolver son las siguientes:

- 1º) ¿Se encuentra indebidamente fundada la sentencia dictada al concluir que J. A. M. es autor del delito de tentativa de homicidio doblemente agravado en concurso ideal -hecho nominado primero-?
- 2º) ¿Se encuentra indebidamente fundada la sentencia dictada al concluir que J. A. M. es autor del delito de Coacción -hecho nominado segundo-?
- 3º) ¿Se encuentra indebidamente fundada la sentencia dictada al concluir que J. A. M. es autor del delito de lesiones graves -hecho nominado tercero-? 4º) ¿Qué resolución corresponde adoptar?

Los señores Vocales emitirán sus votos en el siguiente orden: Doctores Aída Tarditti, Sebastián Cruz López Peña y María Marta Cáceres de Bollati.

A LA PRIMERA CUESTIÓN

La señora Vocal doctora Aída Tarditti, dijo:I. Por Sentencia N° 20, dictada el 11 de mayo de 2016, la Cámara en lo Criminal y Correccional, Civil y Comercial, del Trabajo y de Familia de la ciudad de Deán Funes, resolvió -en lo que aquí interesa-: *“...1º) Declarar a J. A. M., alias: “N. S.”, ya filiado, autor responsable de los delitos de Tentativa de Homicidio – Femicidio - doblemente agravado en concurso ideal (C.P. art. 42 y 80 inc. 1º último supuesto e inc. 11) -hecho nominado primero-, Coacción simple (C.P. art. 149 bis, 2do párrafo) -hecho nominado segundo- y Lesiones graves (arts. 90 del C.P.) -hecho nominado tercero- todo en concurso real, contenidos en la acusación de fs. 262/281 y en la ampliación de la misma*

efectuada en el debate, e imponerle la pena de once años de prisión con adicionales de ley y costas. (arts. 5, 9, 12, 40 y 41 del C.P. y 550 y 551 del C.P.P.)...” (fs. 341/352 vta.).

II. El Dr. A. P. V., defensor del incoado J. A. M., interpone recurso de casación en contra de la resolución aludida, invocando ambos incisos del art. 468 del CPP (fs. 579/581 vta.). Denuncia genéricamente que, conforme lo previsto por el art. 413 inc. 4º de la ley de rito, la sentencia no ha observado las reglas de la sana crítica racional con respecto a elementos probatorios de valor decisivo, y expone como fundamento del recurso que el *a quo* no ha establecido clara y objetivamente una distinción del grado de participación del autor cuya conducta se cuestiona, planteando a continuación una serie de agravios.

Así, en primer lugar, consigna que la actividad desplegada por su defendido no ha sido determinada con la precisión necesaria e inequívoca como para poder establecer que su propósito era el de dar muerte a la supuesta víctima.

Aduce que la distancia y los tiempos que mediaron entre los disparos del imputado y los que del testigo L. efectuara para disuadir al primero no coinciden con las conclusiones receptadas en la sentencia atacada.

Refiere que entonces, analizando los hechos objetivamente, se sostiene y ratifica que la responsabilidad de su defendido debe analizarse apreciando sus dichos, habiendo sostenido éste que su intención era solo darle un susto a P.

Apunta luego que es importante tener en cuenta el perfil de cada uno de los actores de este evento.

En tal tarea, resalta que el imputado M. era altamente dependiente de la relación espiritual que mantenía con la supuesta víctima, y añade que es un hombre simple, sin cultura, sin desarrollo socioeconómico -por su extracción social y por el entorno-.

En cuanto a la damnificada, expone el recurrente que es una profesional universitaria que continuaba capacitándose para sus labores específicas como enfermera, inmersa en un mundo totalmente diferente al del incoado, en contacto con médicos, psicólogos, psiquiatras; por lo cual -afirma- “...no ha sido ajena a su apreciación advertir las limitaciones casi infantiles que le imponía M., quien no obstante haberla tenido de pareja casi un año y medio antes del hecho todavía mantenían ciertos vínculos, si bien esporádicos, siempre de relación sexual...”, acotando que quedó probado que esto fue lo que sucedió el día antes del hecho, “... sembrando con alguna mala intención, renovadas esperanzas de amor a M.; esta defensa sostiene la

premisa “mala intención”, porque la supuesta víctima, pese a saber de los sentimientos de M. hacia ella, expresa a éste por medio de un mensaje, posterior a su reencuentro sexual, que esa noche no se iban a ver, ya que ella se iba a hacer el amor con su novio” ...” (f. 354 vta.).

Seguidamente sostiene que “...en estas cosas nadie es de fierro, las personas tienen sentimientos y actúan en consecuencia...” (f. 354 vta.), y plantea a esta Sala que, frente a los hechos como han sucedido, “...la supuesta víctima, pese a saber lo violento que era M., no duda en ir a festejar su cumpleaños con el mismo y pasar una noche de pasión y lujuria con la persona que más temía, quien le quitaba el sueño, quien incluso, según sus dichos y afirmaciones “...Le tenía mucho miedo. Cuando él se iba a tomar ella cerraba todas las puertas, hasta hizo poner un hierro en una puerta por miedo” ...” (f. 354 vta.).

Por lo expuesto, considera que entre ambos existía una relación enfermiza, donde al parecer lo sexual, más allá de lo sentimental, era altamente determinante entre ellos, especialmente en la supuesta víctima, acotando que “...si esto es así, hay que analizar minuciosamente quien es el que estaba en condiciones de poner límite definitivo a toda esta relación, ¿el simple trabajador rural que juntaba ripio y arena, o la profesional universitaria, madre de dos hijos? ...” (f. 355).

Afirma seguidamente que “...por ello ...no encontramos fundamento que pueda respaldar, la supuesta convivencia entre los mismos, a no ser el aspecto sexual, que aparece entre estos, una situación de juntas casuales, no continuadas y al solo efecto de la relación sexual, al menos al parecer de la supuesta víctima que lo refleja en la etapa del plenario al sostener “...No fue una relación estable, fueron pareja un tiempo, tenían sus relaciones, salían a cenar, almorzaban, iban con sus hijos a su casa...” ...” (f. 355).

A posteriori se ocupa de analizar el relato de la víctima durante el debate, poniendo el acento en dos circunstancias: que dijo que había poca luz en el lugar del hecho, lo que también señala el testigo L.; y que la primera refirió que era “una viva lucha en la oscuridad”.

Partiendo de la primera, y resaltando que la supuesta víctima dijo que el lugar estaba oscuro, plantea el recurrente que no se entiende cómo hizo entonces para ver con claridad que “...de repente saltó M. desde atrás de una verja en donde la esperaba escondido...”, “...saltó como una gacela...”, “...le apuntaba con un arma de puño...” (f. 355).

Sostiene que por ello entiende que resulta creíble y ajustada a los hechos, al sentido común y a la experiencia judicial, la versión suministrada por el imputado en cuanto sostuvo que sólo quería darle un susto.

Apunta también en este sentido que también debe tenerse en cuenta la versión de L., quien dijo que el atacante de P. no respondía pese a los disparos efectuados, y después de gran cantidad de ellos, catorce en total, el imputado se aleja para aparecer por la otra esquina, preguntándose entonces el quejoso cuál fue su intencionalidad.

Destaca que lo señalado debe ser relacionado con la versión que le suministra M. al policía Lira, cuando lo llama por teléfono y le dice “...que se había mandado una macana y que quería quitarse la vida. También le dijo que “la amaba” a la víctima. En esa ocasión el dicente lo fue hablando y lo puso en conocimiento de que la joven estaba con vida, ya que el mismo creía que la había matado. Al otro día lo detuvieron en Villa Quilino, calculando que el mismo no le había dicho la verdad respecto al lugar donde se encontraba. Esta llamada fue al mediodía siguiente al hecho...” (f. 355 vta.).

Advierte que se han soslayado pruebas que resultarían altamente dirimentes a favor del imputado, haciendo alusión a las declaraciones de encargados de dos locales de expendio de bebidas alcohólicas que esa noche inmediata al hecho vendieron éstas al imputado.

Afirma al respecto que no se puede sostener que el incoado M. haya urdido una cortina de humo o de engaño para después cometer el hecho que se le achaca, ya que es una persona sin instrucción y es conocido y acreditado que su reacción frente a un disgusto era escudarse en la ingesta alcohólica, lo cual lo ponía violento, constando ello en la sentencia y en la declaración de la víctima.

Finaliza el agravio destacando que la resolución que ataca se caracteriza por la inexistencia de certeza en razón de que de las pruebas colectadas en la instrucción y en el debate no puede inferirse el dolo homicida del encartado.

Apunta que éste es sólo una víctima envuelto en una relación enfermiza, que durante un largo tiempo fue objeto de manipulaciones por parte de la supuesta víctima que, por jugar así, casi pierde su vida, denunciando que hay responsabilidad de parte de ésta, que no se puede soslayar, no pudiéndose cargar toda la culpa en M.

Añade que no se puede dejar de lado que “...la supuesta víctima no le tenía miedo, que jugaba con él ...porque conocía sus sentimientos, de ahí entonces, a la luz de una Sana Crítica Racional y el Sentido Común que pueda achacársele al imputado M. las calificantes que se encuentran contempladas por las normas referidas en la sentencia en crisis (art. 80 inc. 1 y 11) cuya inaplicabilidad se plantea, sosteniendo a criterio de esta defensa que el hecho nominado primero ...debe analizarse como lo expresara supra, apreciando el resultado, por ende el suceso que damnificó a la supuesta víctima P. debe ser calificado como lesiones graves según lo prescripto por el art. 90 concordante y correlativo del Código Penal ...” (fs. 355 vta. y 356).

Por todo lo expuesto solicita se case parcialmente la sentencia, encuadrando el suceso en análisis en la figura de lesiones graves.

III. De autos surgen las siguientes constancias de interés:

a) Plataforma fáctica: “...**PRIMERO** (según la acusación ampliada en el debate) “El diez de abril de dos mil quince, siendo aproximadamente las cuatro horas con cincuenta y ocho minutos, en circunstancias en que C. del C. P. se dirigía a pie por calle xxx de la localidad de xxx, departamento xxx, provincia de Córdoba, en dirección a la parada del colectivo para abordar el mismo con destino a la ciudad de xxx., al pasar frente a la vivienda perteneciente a la familia V., sita en la mencionada arteria y luego de cruzar la calle xxx, a la altura de la calle adoquinada, fue sorprendida por su ex pareja, el imputado J. A. M., quien portando un arma de fuego calibre 22 -que no fue habida por la instrucción- apuntaba a P. a la cabeza al tiempo que le manifestaba “vengo a matarte hija de puta, si no sos mía no vas a ser de nadie”, lo que provocó que ésta a los gritos le implorara “no A., no me hagas esto, tranquilízate, no A. no por favor, no me mates”, mientras se cubría la cabeza con la mochila que llevaba consigo, la que el imputado, con violencia, intentaba quitársela, pero, al no lograrlo, y con la intención de llevar a cabo su propósito, le habría efectuado un disparo que le impactó en el pómulo derecho, para seguidamente darle un empujón haciéndola caer al suelo boca abajo, donde P. permaneció encogida de brazos y piernas, oportunidad aprovechada por el prevenido que se hallaba al lado de P. para efectuarle dos disparos más que le impactaron en el omóplato derecho y en el muslo derecho, al tiempo que P. llamaba a los gritos a S., su hermana. Alertados por los gritos, salen a la vía pública los vecinos F. A. L., y el hijo de éste N. J. A. L., que al observar que M.

apuntaba con el arma de fuego a P., el primero de los nombrados efectuó unos disparos al aire con un arma de fuego 9 mm, marca Golck, con el objeto de que el prevenido cesara en su actitud en defensa de P., hasta que finalmente el imputado se da a la fuga con el arma de fuego en su poder, sin concretar sus designios criminosos por circunstancias ajenas a su voluntad, la oportuna intervención de los dos vecinos. Como consecuencia del accionar del prevenido M., C. del C. P sufrió "... herida de arma de fuego en rostro, en hemicara derecha, en tórax a la altura del omóplato derecho y en muslo derecho...", por las que se le asignaron cuarenta y cinco días de curación e igual tiempo de inhabilitación para el trabajo (ver f. 27). La conducta del acusado reveló la intención de matar a la víctima C. del C. P., por su condición de mujer en un contexto de violencia de género ...” (fs. 341 y vta., el énfasis es mío).

b) Declaración del imputado M.: debidamente intimado e invitado a prestar declaración el acusado expresó su voluntad de declarar. Reconoció que cometió el hecho, aunque negó intención de matar. Pidió disculpas a la víctima. Reconoció que mantuvo con la nombrada una relación sentimental, de pareja, durante tres años aproximadamente, y señaló que desde hacía un año y medio estaban separados. Que el día anterior, por la tarde, la misma le dijo que iría a su casa para que hablaran, y que después le mandó un mensaje diciéndole que se quedaría para hacer el amor con su novio. Que en esa ocasión se manifestaron algunas cosas, y luego terminó la comunicación. Que se fue al boliche donde empezó a tomar, regresó a su casa, siguió tomando y después terminó “haciendo este daño”. Agregó que el día seis de abril C. fue e hicieron el amor y le pidió plata; que ella siempre lo llamaba diciéndole que no le alcanzaba el dinero y le “mangueaba” unas monedas. Que repetidas veces le pidió que se reconciliaran, pero ella lo tenía engañado. Que vivió con C. P. hasta agosto del año 2013, que no tuvo hijos con ella, y que C. alquilaba una casa y él pagaba la comida. Que la conoce desde que eran chicos e iban a la escuela. Que estuvo enamorado de ella. Que C. lo molestaba por teléfono. Que el arma siempre estuvo guardada en unos cajones de herramientas y que él la había sacado unos quince días antes y la había puesto arriba del ropero. Negó intención de matarla, y refirió que solo fue como para decirle que terminara y le dijera la verdad de lo que iba a hacer. Que recuerda que en ese momento ella tenía una mochila y le pedía que bajara el arma, que luego se le arrojó encima y ello motivó el disparo, que se asustó y se fue para su casa, no recordando nada más. Que al amanecer se despertó

en el campo a unos quinientos metros del lugar del hecho pero no sabe cómo llegó a ese lugar. (fs. 342 vta. y 343).

IV.1. Para comenzar se advierte que, pese a invocar el motivo sustancial de casación, el recurrente cuestiona la fundamentación dada por el tribunal de juicio a fin de sostener que en el *sublite* se encontraba acreditada la concurrencia de las notas típicas de los delitos por los cuales el incoado M. resultó condenado.

Es que, si bien pretende como objetivo final una modificación de la calificación legal en pos de favorecer la situación de su defendido (propugna la aplicación de la figura de las lesiones graves del art. 90 del CP), su estrategia consiste -en prieta síntesis- en intentar demostrar que en el *subexamen* no se acreditó el dolo homicida del incoado y que la fundamentación del *a quo* fue defectuosa en torno a este y a otros puntos (agravantes aplicadas).

Por ello es que este agravio será analizado y respondido bajo la óptica del motivo formal de casación.

2. Efectuada tal aclaración, ha menester recordar que, en lo que respecta a la fundamentación probatoria, tratándose de un planteo formulado por la defensa técnica del imputado, compete a esta Sala verificar “*la aplicación de las reglas de la sana crítica en la valoración de las pruebas en el caso concreto*”, con el único límite de lo que no resulte revisable, esto es, “*lo que surja directa y únicamente de la inmediación*” (CSJN, 20/9/05, “Casal”). Ahora bien; si la obligación constitucional y legal de motivar la sentencia impone al Tribunal de mérito -entre otros recaudos- *tomar en consideración todas las pruebas fundamentales legalmente incorporadas en el juicio* (De la Rúa, Fernando, *La casación penal*, Depalma, 1994, p. 140; TSJ, Sala Penal, S. n° 44, 8/6/00, “Terreno”, entre muchos otros), y efectuar dicha ponderación *conforme la sana crítica racional* (art. 193 C.P.P.), resulta claro que el recurso que invoca la infracción a las reglas que la integran -lógica, psicología, experiencia- debe también contraponer un análisis de todo el cuadro convictivo meritado, y en función de éste, a su vez, evidenciar la decisividad del vicio que se denuncia (art. 413 inc. 4°, C.P.P.). De allí que resulte inconducente una argumentación impugnativa que se contente sólo con reproches aislados que no atiendan al completo marco probatorio o que esgrima un defecto carente de trascendencia en una apreciación integrada de aquél. En tales supuestos, al no efectuar un abordaje que agote las distintas premisas que sostienen la conclusión que causa agravio, la crítica no alcanza a enervarla y la decisión

transita incólume el control casatorio (“Fernández”, S. n° 213, 15/8/2008; “Crivelli”, S. n° 284, 17/10/2008; “Arancibia”, S. n° 357, 23/12/2010).

3. El cotejo de las críticas traídas en el libelo recursivo con la fundamentación probatoria de la sentencia, a la luz de la doctrina judicial expuesta, conducen necesariamente a concluir que la pretensión del impugnante no puede prosperar.

Es que, por un lado, se detecta que en lugar de ofrecer una visión crítica sobre la totalidad del marco convictivo meritado por el *a quo*, el quejoso basa su estrategia defensiva en análisis parciales que desatienden la univocidad que emana de su apreciación integrada.

Se advierte además que algunos de los argumentos centrales que trae en torno a la cuestión que pretende discutir (dolo homicida y presunto estado de inconciencia por ebriedad, por ejemplo) fueron planteados en el debate y descartados en la sentencia atacada con sólidos fundamentos, los cuales, por ende, permanecen inconvencibles -tal como se verá *infra*-.

Se vislumbra asimismo que el recurrente formula cuestionamientos que, además de resultar claramente inconducentes por la nula incidencia que tienen en relación al objetivo perseguido, se construyen desde una perspectiva diametralmente opuesta a las concepciones actuales del derecho supranacional y nacional en torno a la mujer y a la violencia de género (Convención “Belén do Pará”, Convención CEDAW, Ley N° 26485 –Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos que se desarrollen sus relaciones interpersonales- y Ley N° 26791 - que modifica el CP introduciendo el inc. 11 del art. 80-; entre otras). Me refiero, concretamente, a aquellos argumentos del libelo que tienden a responsabilizar a la víctima por lo sucedido.

Por otro lado, ha menester señalar que adhiero al cúmulo de razones dadas por el sentenciante en la resolución impugnada con respecto a la cuestión concreta que aquí nos ocupa, remitiendo a las mismas en honor a la brevedad.

Ello por cuanto el estudio detenido del decisorio atacado muestra prístinamente que la conclusión condenatoria a la que se arriba es fruto de un análisis integrado y completo de la abundante y categórica prueba reunida, en un todo respetuoso de las reglas de la sana crítica racional.

4. Así las cosas, y sin perjuicio de la remisión general a la fundamentación realizada por el tribunal de juicio, estimo útil efectuar las consideraciones que a continuación se consignan.

A. En primer lugar, se impone profundizar en el aspecto -señalado *supra*- en cuanto a que los ejes sobre los cuales se asienta la estrategia recursiva (y que fueron además los pilares de la postura exculpatoria del imputado M.), aparecen claramente desvirtuados por la prueba obrante en autos, no resultando eficaces las críticas traídas en esta instancia por el quejoso para superar los sólidos argumentos vertidos por el *a quo* en la sentencia.

a) Así, en lo que hace a la afirmación del incoado y su defensa en torno a la supuesta afectación de la capacidad de comprensión y dirección de sus actos por la ingesta alcohólica previa al suceso que nos ocupa, surge de autos que el sentenciante la desechó fundadamente.

En efecto, se basó en que la pericia psiquiátrica practicada sobre el imputado descartaba la posibilidad de “...*insuficiencia de las facultades mentales, alteración morbosa o estado de inconsciencia que permitan suponer que a la fecha de la comisión de los hechos le impidieran comprender el acto y dirigir sus acciones...*” (f. 348).

Confiriéndole además especial importancia a la circunstancia de que el médico psiquiatra que llevara adelante la pericia destacara que “...*el imputado aportó datos de manera detallada y minuciosa en cuanto a lugares, horarios, personas, motivación y demás circunstancias sin presentar disnesias...*” (fs. 348 y vta.).

Asimismo, el sentenciante relacionó estos datos con las testimoniales de la damnificada y de L., señalando que estos últimos resultaban congruentes con lo aportado por el facultativo. Es que la víctima “... *descartó que el acusado haya estado embriagado...*” y surge de su relato que éste pudo saltar como una gacela desde el lugar donde la aguardaba, para luego huir a la carrera. En este mismo sentido, destacó que L. declaró que advirtió que el imputado pudo escapar velozmente del lugar tras los disparos, razón por la cual no creía que estuviera alcoholizado.

Dentro de semejante contexto probatorio ninguna incidencia tiene la denuncia del recurrente en cuanto a que “...*se soslayaron pruebas que resultarían altamente dirimientes a favor del imputado que son los prestados por los encargados de dos locales de expendio de bebidas alcohólicas, que esa noche inmediata al hecho vendieron bebidas alcohólicas al imputado...*” (f. 355 vta., sic).

Es que resulta evidente que, aun contando con tales dichos, cuanto mucho de los mismos podría surgir la posibilidad de consumo de alcohol por parte del imputado M., pero en modo alguno ello podría conducirnos a negar lo concluido por la pericia psiquiátrica, en la que se sostuvo categóricamente, reitero, que el imputado no se encontró en estado de inconciencia que le impidiera comprender la criminalidad de sus actos y dirigir sus acciones.

Con mayor razón aun si se detecta que las conclusiones de tal prueba técnica y objetiva se condice plenamente con la mecánica de los sucesos que surge de los dichos de la damnificada P. y del testigo L.

b) Al mismo resultado se llega respecto a la tesis de la defensa en cuanto a que su asistido no obró con dolo homicida, sino que sólo quiso asustar a P.

En efecto, se advierte que el sentenciante, luego de ponderar la prueba colectada, destacó varias circunstancias con el fin de arrojar luz sobre la plataforma fáctica que se endilga al incoado y, por ende, respecto al extremo subjetivo que aquí nos ocupa. Ello resulta conforme a la jurisprudencia de esta Sala, en cuanto tiene dicho que el dolo, por tratarse de una cuestión subjetiva, es un hecho que no puede ser aprehendido a través de la percepción directa del Juzgador sino que debe ser derivado a partir de la conducta desenvuelta por el agente que forma parte de la imputación (TSJ., Sala Penal, “Tita”, S. n° 22, 17/4/1998; “Esperón”, A. n° 111, 15/4/2004; “Druetta”, S. n° 259, 2/10/2009; “Luna”, S. n° 42, 2/3/10; “Barrera”, S. n° 154, 10/6/2010; “Sesín”, S. n° 277, 30/10/2012; entre otros).

* Así, en tal tarea, el tribunal de juicio señaló que la damnificada sostuvo un relato coherente y detallado de lo sucedido, que encontró eco en los elementos de prueba colectados, y procedió a reseñar el mismo, a fin de patentizar la mecánica de los hechos. En esta dirección, consignó que C. del C. P. admitió que tuvo una relación de pareja, aunque no la calificó de concubinato con el acusado; que el acusado conocía sus movimientos y en especial los horarios en que salía de la localidad de xx hacia la ciudad de xxx ya que trabajaba como enfermera en la terapia del hospital regional. Que en horas de la madrugada salió a tomar el colectivo, caminando por calle xxx, que estaba aún oscuro, y cuando ya había recorrido unos cien metros de su domicilio, vio a M. que saltaba desde la verja de una casa vecina, en donde escondido aguardaba su paso. Que el nombrado, arma en mano, le gritó: “vengo a matarte hija de puta, si no sos mía no vas a ser de nadie”, y que ella se alcanzó a tapar parte de la cara con su mochila, sin embargo el imputado se la sacó y le efectuó

un primer disparo que le impactó en la mejilla derecha a la altura del maxilar, ya en el suelo le hizo otro disparo en la espalda a la altura del omóplato derecho y luego un tercer disparo en el muslo del mismo lado. Que ella le suplicaba que no la matara, estaba con toda la cara ensangrentada por el primer disparo que había recibido en el maxilar y se ahogaba por la sangre que le emanaba por la nariz y la boca. Que fue auxiliada por el hijo del señor L. y no recuerda haber escuchado los disparos que según se enteró con posterioridad hizo el padre de L. para disuadir a su atacante. Que no le fueron extraídos los plomos de los dos primeros disparos, que aún los tiene en su cuerpo y periódicamente debe hacerse controles para evitar intoxicación por aumento de plomo a nivel corporal -saturnismo o plumbosis- (f. 347).

* Expresó el *a quo* que los aspectos destacados del relato de la damnificada fueron confirmados por el testigo F. A. L., quien fue sumamente detallista acerca del hecho que le tocó presenciar. Se ocupó entonces de reseñar sus dichos. Así, consignó que el testigo dijo que trabajó como personal de seguridad privada. Que en la madrugada del día del hecho, alrededor de las cuatro y cuarenta y cinco, se levantó al baño en su casa de calle ..., ocasión en que escuchó gritos y un disparo de arma de fuego. Salió a la calle y tras regresar al interior de su vivienda en busca de una pistola se dirigió con precaución hacia el lugar en donde pudo observar la silueta de una persona que extendía el brazo apuntando hacia otra que se encontraba en el suelo, efectuando dos disparos, podía observar los fognazos. Que, por su parte, hizo un disparo hacia el suelo tendiente a apartar al atacante con resultado negativo, incrementando los disparos de advertencia siempre hacia el piso, en un número de catorce hasta que el agresor se dio a la fuga, corriendo. Que a esa altura ya había llegado también al lugar su hijo N., auxiliando entre los dos a la víctima a quién identificaron como C. P. (fs. 347 y vta.).

* Ponderó el sentenciante que los tres impactos de bala calibre veintidós que recibió la víctima quedaron patentizados en el primer examen médico que se le practicó, según da cuenta el certificado de f. 27 y lo ilustra la fotografía de f. 37. Y acotó que se aprecia nítidamente que presentaba un orificio de entrada en la zona sub orbitaria derecha de la cara; en la región dorsal del tórax a nivel del omóplato derecho y en la parte externa del muslo del miembro inferior derecho (f. 347 vta.).

* Señaló que aunque el arma de fuego utilizada no fue encontrada, el Informe Balístico sobre el examen de las placas radiológicas pertenecientes a la víctima, da cuenta que se trata de proyectiles lanzados con un arma calibre veintidós -conforme surgía de fs. 232/234- (f. 347 vta.).

* Abordó el contexto de violencia de género en que se desarrolló el suceso, y consignó que la damnificada relató que a la fecha del suceso se había mudado a vivir a la casa de su hermana por los malos tratos que recibía del imputado.

Resaltó que en igual sentido declaró su hermana S. del V. P., quien narró que a raíz de la última “paliza” que M. le dio a su hermana en agosto del año 2013, ésta se fue a vivir a su casa. Resaltó asimismo que M. ejercía violencia en contra de su hermana y que más de una vez tuvo que dar intervención a la policía y efectuar denuncias por violencia de género (f. 348).

* Destacó que tales afirmaciones, tanto de la propia víctima como de su hermana, encontraban pleno respaldo probatorio en la prueba instrumental que fue debidamente oralizada -ver fs. 48/49, 51/59, 56/58-, consistente en tres denuncias formuladas en el ámbito de la Ley 9283 (f. 348).

* Sostuvo que, en consecuencia, el cúmulo de probanzas reseñadas conducían a sostener que, tanto el fin homicida como la trama de violencia de género, quedaron reflejadas en la propia dinámica del hecho, en las circunstancias previas (denuncias por violencia familiar) y concomitantes, en especial en las palabras que el acusado profirió antes de efectuar la agresión armada: “Vengo a matarte hija de puta, si no sos mía no vas a ser de nadie” (f. 348).

* Preciso el sentenciante que el incoado “...perseguía anular la dignidad y la libertad de elección de su ex pareja, que había decidido cortar una relación tormentosa, de maltrato y sometimiento, en donde su condición de mujer jugó un papel preponderante...”, y apuntó que “...Anidaba en la psiquis del autor el primitivo concepto de superioridad del hombre hacia la mujer: “mía o de ningún otro hombre”. Una clara expresión que denota la voluntad de sometimiento hacia la mujer, por su condición de tal...” (f. 348).

Tenemos, pues, que la concurrencia del dolo homicida resulta un hecho probado con certeza, quedando descartada de plano y sin necesidad de argumento adicional la tesis defensiva en cuanto a que M. sólo quería asustar a P. En efecto, más allá de todo lo consignado por el *a quo*, el análisis de la modalidad del ataque no

deja dudas al respecto. Así, repárese en que el imputado actuó en contra de su ex pareja empleando un elemento de indiscutible capacidad ofensiva, esto es, un arma de fuego, con la cual le efectuó, a muy corta distancia, plurales disparos dirigidos específicamente a zonas vitales del cuerpo humano. Así, el primero de ellos fue mientras le apuntaba a la cabeza, y atento a que la víctima se la cubría con la mochila y el incoado no logró quitársela, impactó en el rostro de la mujer -más concretamente en el pómulo derecho-. Y luego de ello, tras lograr derribarla al suelo con un empujón -que hizo que P. cayera boca abajo, quedando encogida de brazos y piernas-, efectuó dos disparos más que le dieron a la damnificada en el omóplato y en el muslo -ambos del lado derecho-, causándole con su accionar las lesiones que constan en autos. A todo lo cual debemos sumarle que, en la ocasión del ataque, M. le manifestó a P., expresa y claramente, que había ido a matarla, no trepidando nunca en su accionar, pese a los pedidos de ésta de que “por favor no lo hiciera”. Todas estas circunstancias, insisto, constituyen claros e irrefutables indicadores de que el ataque que emprendió el incoado fue un patente intento de terminar con la vida de P., y conducen a rechazar la pretensión del recurrente.

B. Tampoco puede prosperar -tal como se adelantó al inicio del presente- el cuestionamiento del recurrente en torno a la fundamentación probatoria de la sentencia en relación a las agravantes aplicadas por el tribunal de juicio.

Es que se detecta que no aporta argumentos atendibles a fin de discutir la falta de concurrencia en el caso concreto -y, por ende, la ausencia de acreditación- de las notas típicas exigidas por los incisos 1º y 11º del art. 80 del CP.

a) En efecto, respecto a la última de las agravantes aludidas el quejoso sólo señala que “...*la supuesta víctima no le tenía miedo, que jugaba con él... porque conocía sus sentimientos...*” (fs. 355 vta. y 356), lo cual de ningún modo repercute en la copiosa y fundada argumentación del sentenciante que, al no resultar alcanzada por la crítica, permanece incólume.

Así, repárese en que, por un lado, cuando aludió a la acreditación del contexto de violencia de género en el cual se desarrolló el suceso en el punto **4. A. b)** de la presente, luego de ponderar las testimoniales de la damnificada y de su hermana y las tres denuncias en el ámbito de la Ley 9283, el *a quo* concluyó que el incoado M. “...*perseguía anular la dignidad y la libertad de elección de su ex pareja, que había decidido*

cortar una relación tormentosa, de maltrato y sometimiento, en donde su condición de mujer jugó un papel preponderante...”, y que “...anidaba en la psiquis del autor el primitivo concepto de superioridad del hombre hacia la mujer: “mía o de ningún otro hombre”. Una clara expresión que denota la voluntad de sometimiento hacia la mujer, por su condición de tal...” (f. 348).

Como así también, ya al analizar el encuadre legal que correspondía al accionar del imputado M., el tribunal de juicio efectuó una serie de consideraciones relevantes (fs. 350 vta./351 vta.). Así, resaltó que el propósito de dar muerte a su ex pareja como consecuencia de la ruptura del vínculo sentimental, configuró el episodio final de reiteradas amenazas, en especial para impedir que la mujer rehaga su vida amorosa con otra persona; aclarando que no se trataba de un suceso aislado sino del epílogo de una serie concatenada de violencia física y psicológica.

Específicamente en relación al “femicidio”, consignó que la violencia de género surgía del propio contexto en que se desarrolló el hecho, en especial en aquellas expresiones con las que el autor acompañó la agresión armada **“Vengo a matarte hija de puta, si no sos mía no vas a ser de nadie”**. Apuntó que tales expresiones, sumadas a las vías de hecho -tres disparos con un arma de fuego, el primero en el rostro, otro en la espalda y un tercero en el muslo derecho, pese a las súplicas de la víctima-, sin duda exteriorizaron una posición de poder del varón hacia la sometida mujer víctima. Señaló que se estaba en presencia de un típico femicidio en grado de tentativa, en donde el fundamento de la mayor penalidad residía en la condición de los sujetos tanto activo como pasivo, y expuso que el primero debía ser un hombre, y la víctima una mujer, y debían concurrir circunstancias especiales en su comisión: violencia ejercida en un contexto de violencia de género. Esto es, *“en un ámbito específico, en el que existe una situación de subordinación y sometimiento de la mujer por el varón, basada en una relación desigual de poder, circunstancias que deberán integrar el tipo objetivo del delito...”* (Cfr. Buompadre Jorge Eduardo, *Violencia de Género, Femicidio y Derecho Penal*, Ed. Alveroni, pgs. 156/157, año 2013).

Sostuvo que en esta línea doctrinaria al concepto de violencia de género, que es un elemento normativo del tipo, extralegal, lo encontramos en la Ley N° 26.485, de *Protección integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia con las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales*, cuyo art. 4 define a la violencia contra la mujer como: *“Toda conducta, acción u omisión, que de manera*

directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el estado o por sus agentes. Se considera violencia indirecta a los efectos de la presente ley, toda conducta, acción u omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón” .

Consideró que, bajo las premisas sentadas por dicha norma, que viene a integrar el tipo penal del art. 80 inc. 11, en el caso de autos concurrían los siguientes elementos: a) Acción directa con el propósito de dar muerte a la mujer; b) Una relación desigual de poder; c) La afectación de la libertad, dignidad e integridad física y psicológica de una mujer.

b) En relación a la agravante del inc. 1º del art. 80 del CP, sin perjuicio de que la existencia de la relación de pareja fue incluso reconocida por el propio imputado al momento de desplegar su posición exculpatoria, se advierte que la crítica del impugnante carece de interés, pues aun en el caso en que se hiciera lugar a la pretensión recursiva, ninguna incidencia tendría en el peso punitivo. Es que, al haberse concursado idealmente las agravantes en cuestión, por imperio de las previsiones del art. 54 del CP, corresponde aplicar una pena única (la mayor), siendo que en el *subexamen* ambas tienen la misma escala punitiva; descartándose por lo demás, que a la concurrencia referida se le haya asignado alguna incidencia negativa a la hora de individualizar la sanción concreta a imponer al incoado.

En tal sentido, es de recordar que el interés existe “...en la medida que la materia controvertida puede tener incidencia en la parte dispositiva del pronunciamiento, anulándolo o modificándolo”, o bien cuando el recurso deducido resulta ser el medio adecuado para excluir el agravio que aparece como posible (TSJ, Sala Penal, S. n° 107, 7/12/00, “Bonino”; S. n° 30, 11/4/01, “Torres”; S. n° 59, 5/8/02, “Matta”, “Disandro” cit. entre otros).

Por todo lo expuesto, a la presente cuestión voto negativamente..

El señor Vocal doctor Sebastián Cruz López Peña, dijo:

La señora Vocal preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

La señora Vocal doctora María Marta Cáceres de Bollati, dijo:

Estimo correcta la solución que da la señora Vocal del primer voto, por lo que adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de idéntica forma.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN

La señora Vocal doctora Aída Tarditti, dijo:

I. El Dr. A. P. V., defensor del incoado M., también cuestiona la sentencia dictada en relación al hecho nominado segundo.

Refiere que no existe prueba independiente respecto a este suceso, pues sólo se sustenta en la versión de la propia víctima.

Añade que la presunta damnificada aparece en el escenario manifestando un supuesto temor, habiéndose acreditado que “...ese supuesto miedo no existe respecto de la supuesta víctima...” (f. 356 del libelo).

Agrega que el imputado negó terminantemente el hecho en cuestión y apunta que no existen testigos independientes.

Señala que debe sumarse a lo apuntado que hay razones suficientes y probadas en autos para sostener que P. no le temía a M., sino que “...pudo haber tenido un poco de vergüenza ya que paralelamente según se pudo establecer, que mientras andaba de novia con R., tenía relaciones sexuales con M., y de ahí entonces que a la pregunta que le efectúa M., si ese era su novio, ella le atribuye otra connotación, con el evidente propósito de denunciar a mi defendido...” (f. 356).

Solicita la absolución del incoado, por no encontrarse acreditado con certeza su intervención en el hecho por el cual también resultara condenado.

II. Como permite apreciar la reseña que antecede, el impugnante cuestiona -en lo central- la fundamentación probatoria del fallo, alegando que no hay prueba que corrobore la versión de la víctima; crítica ésta que no puede prosperar.

1. Es que si bien no existe en el *subexamen* un testigo presencial que corrobore la versión de la damnificada, el sentenciante puso de resalto que las amenazas vertidas por el imputado, tendientes a impedir que la víctima rehiciera su vida sentimental con otra persona tras la ruptura con el acusado, “...serían el prólogo del primer hecho {cuyo análisis se abordó en la primera cuestión de la presente} en donde intentó consumir estas amenazas de muerte...” (f. 349).

En este sentido, el *a quo* resaltó la íntima ligazón de ambos sucesos, destacando que este factor conducía a no dudar del relato de la víctima -sin perjuicio de lo cual, atento a no existir secuestro de arma, descartó la agravante que pesaba originalmente sobre el incoado, tal como lo había solicitado el Fiscal de Cámara (f. 349)-.

Ponderó como un elemento importante a los fines de reforzar la credibilidad en los dichos de la damnificada *“...la inmediata denuncia que efectuó en sede policial... el mismo día del suceso y el anoticiamiento en el marco de la Ley de Violencia Familiar N° 9283 ante el Juez de Paz del lugar, lo que motivó el dictado de la medida preventiva de “Prohibición de Acercamiento” ...”* (f. 349 vta.).

2. Estimo que la conclusión condenatoria resulta el fruto de una ponderación completa e interrelacionada de la prueba reunida, respetuosa de las reglas de la sana crítica racional. Viene al caso recordar que la prohibición de todo tipo de violencia contra la mujer tiene un amparo especial a nivel supranacional en la “Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer” (más conocida como la “Convención de Belém Do Pará”, aprobada por Ley 24.632) y que a nivel nacional se plasma en la Ley 26.485. A través de estos instrumentos normativos se busca encontrar medidas concretas para proteger el derecho de las mujeres a una vida libre de agresiones y de violencia, tanto dentro como fuera de su hogar y núcleo familiar. Con ello, se pretende hacer visible la violencia sistemática y generalizada que sufren las mujeres por el hecho de ser tales, para así combatir su aceptación y naturalización cultural.

En esa inteligencia, la jurisprudencia de la Sala ha atribuido especial preponderancia a la declaración de la víctima de violencia sexual y de género, advirtiendo que si bien la mayoría de las veces será prueba indiciaria la que corrobore su relato (puesto que esta clase de hechos suele cometerse en ámbitos de intimidad, ajenos a las miradas de terceros y en ámbito de confianza), ello no impide sostener una conclusión condenatoria en la medida en que los indicios meritados sean unívocos y no anfibológicos, y a su vez sean valorados en conjunto y no en forma separada o fragmentaria (TSJ., Sala Penal, “Boretto”, S. n° 212, 15/8/2008; “Cisterna o Sisterna”, S. n° 4, 16/2/2009; “Aranda”, S. n° 333, 17/12/2009; “Laudin”, S. n° 334, 9/11/2011; “Serrano”, S. n° 305, 19/11/2012; “Diaz”, S. n° 434, 27/12/2013).

Especialmente, se ha puesto énfasis en la necesidad de analizar el hecho dentro del “contexto violento” en que ocurrió, remarcándose que, si bien los tipos penales están configurados como sucesos que aíslan ciertos

comportamientos ofensivos contra un determinado bien jurídico en general, esta segmentación no puede hacer perder valor probatorio al integral fenómeno pluriofensivo de la violencia en el particular contexto, en el que se entremezclan diferentes modalidades que pueden incluir malos tratos físicos, psíquicos, amenazas, modos graves de privación de la libertad, etc. Máxime cuando estos hechos ocurren en un marco de vulnerabilidad, dado que raramente se realizan a la vista de terceros, porque una de las características de la dominación por violencia, en sus múltiples manifestaciones, es precisamente el aislamiento de la víctima.

Repárese en este sentido que fue clara S. del V. P., hermana de la damnificada, cuando relató que el imputado ejercía violencia en contra de ésta y que más de una vez tuvo que dar intervención a la policía y efectuar denuncias por violencia de género; dato éste que evidentemente debe integrarse en la valoración probatoria respecto al suceso que aquí nos ocupa.

Así pues, se detecta que es el recurrente quien soslaya las pautas establecidas, en tanto su planteo descansa sobre la idea de que sólo es posible alcanzar la certeza a partir de testigos directos, proponiendo un análisis absolutamente desvinculado de los elementos que apoyan las declaraciones de la víctima. Advirtiéndose aquí también -al igual que al tratar la primera cuestión- que ciertos argumentos que trae (en relación a sucesos de la vida privada de la víctima), a más de resultar absolutamente ineficaces para desligar a su asistido del suceso por el cual fuera condenado, implican construcciones contrarias al paradigma que en torno a la mujer y a la violencia de género rige en la actualidad en el derecho supranacional y nacional.

Para finalizar, ha menester aclarar que tampoco tiene incidencia la tesis del quejoso en cuanto a que se acreditó que su víctima no le tenía miedo al incoado M.

Es que -sin perjuicio de que ello resulta una aseveración dogmática, carente de sustento en las constancias de autos- el argumento gira en torno a la prueba de un elemento que no es un requisito típico de la figura legal en análisis.

En efecto, repárese en que esta Sala tiene dicho (TSJ, “Benegas”, S. n° 34, 13/3/2015) que la coacción es un delito contra la libertad individual, regulado en la segunda parte del art. 149 bis que integra el Capítulo 1, Título 5 del Libro Segundo del Código Penal Argentino, que atenta contra la determinación de las personas. La acción típica consiste en hacer uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad. Importa, pues, el anuncio, por parte del autor, de un daño que recaerá sobre

la víctima o un tercero. La doctrina entiende que la amenaza debe ser *injusta*, es decir que quien la infiere no debe estar legitimado civil o penalmente para hacerla; *seria*, esto es que el daño sea de posible realización por el autor en el caso concreto o -aunque objetivamente imposible- que la víctima crea en dicha posibilidad y *grave*: el mal anunciado debe ser idóneo para alarmar o amedrentar al sujeto pasivo (ver Carrera, Daniel Pablo y otros, "*Estudios de las figuras delictivas*", 1994, Ed. Advocatus Córdoba, pág. 397). La idoneidad de la amenaza depende tanto de la objetividad del daño anunciado como de las condiciones y circunstancias personales del amenazado (cfr. Núñez, Ricardo C., "*Manual de Derecho Penal, Parte Especial*", 2da. Edición actualizada por Víctor F. Reinaldi, 1999, Marcos Lerner Editora Córdoba, pág. 169). Se ha señalado, también, que el contenido de la imposición tiene que ser una conducta determinada; si no lo es, el ilícito sólo podría configurar el delito de amenazas. Además, la exigencia debe resolverse en un hacer o en un omitir que sea posible para el sujeto pasivo; cuando para él sea imposible (material o jurídicamente), la acción también deberá ser examinada como amenaza (Creus, Carlos "*Derecho Penal -Parte especial-*", 6ta. edición, Ed. Astrea, 1999, p. 336; Céliz, Fabián R.E. "*Delitos contra la libertad*" [Niño, Luis F. - Martínez, Stella M. - Coordinadores-], Ed. Ad-Hoc, 2003; Carranza Tagle, Horacio A. en "*Estudios de las figuras delictivas*" [Carrera, Daniel Pablo -Director-], Ed. Advocatus, 1994, p. 400). Si bien la doctrina reconoce que no basta con el anuncio de oponer inconvenientes (cfr. Donna, Edgardo Alberto, "*Derecho Penal Parte Especial*", 2001, Ed Rubinzal – Culzoni, pág. 248), molestias o quitar el saludo o la amistad (cfr. Buompadre, Jorge E., "*Delitos contra la libertad*", 1999, Ed. Mave Buenos Aires, pág. 132/133), tampoco requiere que llegue a intimidar efectivamente al amenazado (cfr. Donna, ob. cit. pág. 248; Buompadre, ob. cit. Pág. 136). Se trata, además, de un delito formal que se consuma cuando la víctima conoce la amenaza idónea sin que resulte necesario que esta proceda como el autor le exige.

Bajo tales parámetros, entonces, resulta irrelevante si la víctima se siente o no efectivamente intimidada por las amenazas del imputado; lo importante es su aptitud para causar alarma o temor; capacidad de la cual no puede dudarse en los presentes hechos, teniendo en cuenta las condiciones y circunstancias que las rodeaban.

3. Por lo señalado, voto negativamente al planteo formulado.

El señor Vocal doctor Sebastián Cruz López Peña, dijo:

La señora Vocal preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

La señora Vocal doctora María Marta Cáceres de Bollati, dijo:

Estimo correcta la solución que da la señora Vocal del primer voto, por lo que adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de idéntica forma.

A LA TERCERA CUESTIÓN

La señora Vocal doctora Aída Tarditti, dijo:

I. El Dr. A. P. V., defensor del incoado M., también cuestiona la sentencia dictada en relación al hecho nominado tercero.

Refiere que en el debate, la esposa del imputado sostuvo que, si bien éste le pidió a D. que se retire, este último lo tomaba todo en broma, y que inclusive para darle fuerza a sus dichos, M. agarró un palo sin agredirlo. Que en esa ocasión D. simuló retirarse y se dirigió hasta su auto, extrayendo un rebenque con cadena y cabo de caño, aplicándole a M. un golpe en el cuero cabelludo (lesión de alta consideración), luego de lo cual se trabaron en lucha, “...como es natural...” (f. 356 vta.), y que su asistido sólo se defendió, siendo que las secuelas que padeció D. fueron el fruto de su propia intemperancia, frente a alguien que quería excluirlo ante un hecho que, a la luz de la razón y del sentido común, resulta aceptable. Añade en relación a esto último el recurrente que “...es difícil entender que un marido que al llegar a su casa advierta que su mujer se encuentra agarrada de la mano con su “amigo”, y que este, el marido, en este caso mi defendido, lo invite suave y cariñosamente a que se vaya de la manera más racional, para que no haya problemas y D. finalmente lo agreda...” (sic, f. 356 vta. del libelo).

Por lo expuesto, solicita se encuadre el accionar de su defendido en la figura prevista en el art. 34 inc. 6º del CP, disponiéndose en consecuencia su absolución.

Finaliza su presentación el quejoso formulando reserva del caso federal.

II. El hecho que el sentenciante estimó acreditado con certeza es el siguiente: **TERCERO:** “*El diecisiete de marzo de dos mil doce, siendo aproximadamente las dieciséis horas con treinta minutos, en circunstancias en que P. S. D. -sobreséido el 10/6/2015- y M. A. M. se encontraban conversando sentados afuera de la vivienda perteneciente a esta última, sita en calle, de la localidad de, departamento, provincia de*

Córdoba, observaron que se acercaba al lugar el esposo de M., el prevenido J. A. M. (a) “N. S.”, quien unos metros antes de arribar al domicilio, le manifestó a D. a los gritos que hacía en la casa de A., a lo que D. no respondió pensando que era una broma. Sin embargo, al presentarse el prevenido M. insistió en preguntarle a D. los motivos por los que se hallaba allí y por qué sujetaba de la mano a M., manifestándole que se fuera que iba a tener problemas, por lo que D. trata de calmarlo sin conseguirlo, razón por la cual se dirigió hasta su vehículo marca Renault 12, de color verde, con el objeto de retirarse, siendo perseguido por el prevenido M. munido de un palo de setenta cm de largo, con un extremo torneado y cabo de veinte cm, astillado, por lo que D. al advertir la intención de aquél, extrae un rebenque con cadena y cabo de caño del interior de su vehículo, aplicándole un golpe en el cuero cabelludo a M., mientras que éste reacciona propinándole golpes por distintas partes del cuerpo, sobre todo en los brazos, momentos en que toman intervención los vecinos L. M. F. y su pareja M. S. T., quien le pide a D. que se retire del lugar, lo que así hizo. A raíz de este accionar, P. S. D. presentó “... hematomas en rostro, miembro superior y tórax... fractura expuesta bilateral del cúbito distal grado II con forma conminuta. Producida por traumatismo con objeto sólido...”, por las que se le indicaron diez días de curación y más de noventa días de inhabilitación para el trabajo y puso en peligro la vida (ver fs. 138), y J. A. M. resultó con “...herida cortante en cuero cabelludo y sutura 2 puntos en región frontal escoriación y herida en brazo izq. de 10 cm y lesión escoriativa de 2 cm brazo derecho. Inflamación y hematoma en tobillo der. de 5 cm diámetro y con edemánides...”, por las que se le asignaron diez días de curación y siete días de inhabilitación laboral, y no puso en peligro la vida (ver f. 149)...” (fs. 342 y vta.).

1. El análisis del planteo formulado, cotejado con la sentencia cuestionada, conduce claramente a rechazar el primero y a confirmar la segunda. Ello así toda vez que el recurrente da una versión de los hechos distinta a la que el *a quo* tuvo por acreditada, sin lograr desvirtuar la argumentación proporcionada en la resolución, en base a las constancias de autos.

En efecto, repárese en que en la pieza atacada se hizo hincapié, en primer lugar, en que el propio incoado M. reconoció la existencia de una riña recíproca con P. D. Señalándose a continuación que de ello también dieron cuenta la esposa del primero en su declaración por ante la instrucción –aclarando que en esa

oportunidad estaba separada de hecho del acusado y que en el debate sus dichos contrastaron con los primeros- y los testigos presenciales L. M. F. y M. S. T. (f. 350).

Expuso el *a quo* que, conforme a los testimonios aludidos, el imputado y D. se trezaron en una pelea, que se originó a partir de que el imputado llegó a casa de su esposa, de la que estaba separado de hecho, y la encontró con el nombrado D. (f. 350).

Destacó asimismo el sentenciante que los dos se ocasionaron lesiones recíprocas, y especificó que D., de setenta y seis años, “...llevó la peor parte al resultar lesionado con un palo por parte de M., lesiones que pusieron en peligro su vida y lo inhabilitaron para el trabajo por más de noventa días, siendo internado en un nosocomio de Colonia Caroya...” (f. 350).

Añadió que las lesiones en cuestión estaban plenamente acreditadas por informe médico de f. 138, del cual surge que D. presentó “...hematomas en rostro, miembro superior y tórax... fractura expuesta bilateral del cúbito distal grado II con forma conminuta. Producida por traumatismo con objeto sólido...” (fs. 350 y vta.).

2. Tal como lo adelantaba, estimo que la conclusión condenatoria resulta una derivación razonada del plexo probatorio reunido.

En efecto, se advierte que la estrategia del recurrente soslaya el contexto de la agresión mutua protagonizada por D. (sobreseído por prescripción, conforme surge de fs. 228/229 de autos) y por M., la cual tuvo origen en la actitud inicial de este último, quien al ver a su esposa -de quien estaba separado de hecho- conversando en la vereda de su casa con D., lo increpó a los gritos, y se armó con un palo de 70 cms de largo, con un extremo torneado y cabo de 20 cms., astillado.

Repárese en que el propio imputado reconoció su accionar inicial, aunque en otros términos. Así, refirió que le dijo a D. que se fuera de su casa porque iba a llegar la policía y no quería que tuviera problemas, que sólo quería protegerlo de la policía, para que no tuviera problemas (fs. 329 y vta.). Pero su versión ni siquiera se condice con lo referido por su defensor, si tenemos en cuenta que de su libelo se infiere que éste termina justificando -aunque veladamente- el accionar agresivo de su defendido, cuando consigna que “...es difícil entender que un marido que al llegar a su casa advierta que su mujer se encuentra agarrada de la mano con su “amigo”, y que este, el marido... lo invite suave y cariñosamente a que se vaya de la manera más

racional, para que no haya problemas..." (f. 356 vta.), agregando seguidamente, para favorecer a su defendido, "*...y D. finalmente lo agrede...*". No se advierte además, si todo era como el imputado refiere, por qué motivo iba a llegar al lugar la policía, si sólo relató haber discutido con su esposa.

Surgiendo de autos además que personal policial arribó finalmente al domicilio, luego de sucedido el evento que nos ocupa, por pedido del herido D., que concurrió al Destacamento de Quilino y dio cuenta de lo que había pasado, ocasión en la cual se produjo el secuestro del palo con el cual fue agredido D. (ver declaración del policía D. A. C. de fs. 123/124 y acta de f. 127).

También pierde consistencia la versión defensiva, si se repara, justamente, en que el incoado tomó un palo de las dimensiones y características aludidas *supra*. En efecto, esa actitud no resulta pacífica ni amigable, sino que es un claro indicador de la concurrencia de una situación de características violentas.

Por lo señalado, voto negativamente al planteo formulado.

El señor Vocal doctor Sebastián Cruz López Peña, dijo:

La señora Vocal preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

La señora Vocal doctora María Marta Cáceres de Bollati, dijo:

Estimo correcta la solución que da la señora Vocal del primer voto, por lo que adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de idéntica forma.

A LA CUARTA CUESTIÓN

La señora Vocal doctora Aída Tarditti, dijo:

Atento al resultado de la votación que antecede, corresponde rechazar el recurso de casación deducido por el Dr. A. P. V., en favor del imputado J. A. M., con costas (arts. 550 y 551, C.P.P.).

Así voto.

El señor Vocal doctor Sebastián Cruz López Peña, dijo:

La señora Vocal preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

La señora Vocal doctora María Marta Cáceres de Bollati, dijo:

Estimo correcta la solución que da la señora Vocal del primer voto, por lo que adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de idéntica forma.

En este estado, el Tribunal Superior de Justicia, por intermedio de la Sala Penal;

RESUELVE: Rechazar el recurso de casación interpuesto por el Dr. A. P. V., en favor del imputado J. A. M. Con costas (CPP, 550/551). Con lo que terminó el acto que, previa lectura y ratificación que se dio por el señor Presidente en la Sala de Audiencias, firman éste y las señoras Vocales de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, todo por ante mí, el Secretario, de lo que doy fe.

LOPEZ PEÑA, Sebastián Cruz

VOCAL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

TARDITTI, Aida Lucia Teresa

CACERES de BOLLATI, María Marta

VOCAL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

VOCAL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

SOSA LANZA CASTELLI, Luis María

SECRETARIO/A GENERAL DEL T.S.J